



Comunidad de Madrid

MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2001, DE 29 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECE LA DURACIÓN MÁXIMA Y EL RÉGIMEN DE SILENCIO ADMINISTRATIVO DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS, EN LA REDACCIÓN DADA POR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 8/2009, DE 21 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS LIBERALIZADORAS Y DE APOYO A LA EMPRESA MADRILEÑA.

FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO.

Consejería/Órgano proponente	Consejería de Presidencia, Justicia e Interior	Fecha	
		inicial	
Título de la norma	Modificación de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos (en la redacción dada por el artículo 8 de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña).		
Tipo de Memoria	<input type="checkbox"/> Extendida <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutiva		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			





Comunidad de Madrid

Situación que se regula	<p>El apartado 2.3 del Anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos, en la redacción dada por el artículo 8 de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, prevé un plazo de duración máxima de los procedimientos en materia de fundaciones, de tres meses y un efecto estimatorio del silencio administrativo. Dicha regulación no se aviene a la realidad del Subsector Público Fundacional, al elevado número de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, al volumen anual de expedientes tramitados y a la complejidad de muchos de ellos, especialmente, los de creación, modificaciones estatutarias, y órganos de Gobierno, lo que justifica, cuanto menos, un plazo de duración igual al de los procedimientos de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, en el que el número de procedimientos tramitados es inferior.</p> <p>En el mismo sentido, debe resaltarse cómo en la regulación estatal el plazo máximo para notificar la resolución es de seis meses cuando se trate de la primera inscripción, modificación o nueva redacción de estatutos, fusión y extinción de la fundación y de tres meses para el resto.</p>
Objetivos que se persiguen	<p>La modificación puntual del Anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos (en la redacción dada por el artículo 8 de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña), concretamente, del apartado 2.3, con el fin de que el plazo máximo de resolución (y notificación) de los procedimientos en materia de fundaciones sea de cuatro meses en vez de tres, atendiendo, así, a la realidad del Subsector Público Fundacional de la Comunidad de Madrid, al volumen de expedientes tramitados y a la complejidad de muchos de ellos.</p>





Comunidad de Madrid

Principales alternativas consideradas	Se ha considerado la posibilidad de establecer un plazo máximo para notificar la resolución de seis meses cuando se trate de la primera inscripción, modificación o nueva redacción de estatutos, fusión y extinción de la fundación y de tres meses para el resto, en iguales términos que la regulación estatal. Finalmente, se ha optado por un plazo máximo general de cuatro meses para todos los procedimientos en materia de fundaciones, con el fin de evitar la demora excesiva de resolución de los procedimientos y permitir que el plazo para resolver los procedimientos de inscripción de los órganos de gobierno de las fundaciones sea superior a tres meses, dada la complejidad que, en ocasiones, pueden presentar.
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	Ley

Estructura de la norma	Se pretende una modificación meramente puntual de la Ley 1/2001.
Informes a recabar	<p>Informe de coordinación y calidad normativa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.</p> <p>Informes por impacto por razón de género, de orientación sexual y en materia de familia, infancia y adolescencia.</p> <p>Informe de Observaciones de las Secretarías Generales Técnicas.</p> <p>Informe de legalidad de la Secretaria General Técnica.</p> <p>Abogacía General de la Comunidad de Madrid.</p>





Comunidad de Madrid

Trámite de audiencia/Información Pública	<p>El trámite de consulta pública ya que carece de impacto significativo en la actividad económica y regula un aspecto muy parcial de la materia.</p> <p>Se someterá a trámite de audiencia e información públicas, regulado en el artículo 60.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril y el artículo 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.</p>	
ANÁLISIS DE IMPACTOS		
ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS	<p>La modificación legislativa se basa en la competencia de la Comunidad de Madrid en materia de procedimiento administrativo atribuida por el artículo 26.1.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (EACM) y régimen jurídico de su Administración Pública (artículo 27.2 EACM), así como en el título competencial referido a la materia sustantiva cuyo procedimiento se ve afectado, fundaciones. A este respecto, el artículo 26.1.26 EACM establece que la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones dentro de su ámbito territorial.</p> <p>Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 21 d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.</p>	
IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO	Efectos sobre la economía en general	Del contenido del proyecto no se deriva incidencia directa sobre la economía en general





Comunidad de Madrid

	En relación con la competencia	<input checked="" type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	<input type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas. Cuantificación estimada: <input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas. Cuantificación estimada: poner en euros € <input checked="" type="checkbox"/> No afecta a las cargas administrativas.





Comunidad de Madrid

	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid.</p>	<p><input type="checkbox"/> Implica un gasto.</p> <p><input type="checkbox"/> Implica un ingreso.</p> <p>Cuantificación estimada: de €</p>
IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO		<p><input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo</p>
IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO		<p><input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo</p>
IMPACTO EN MATERIA DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA		<p><input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo</p>
OTRAS CONSIDERACIONES	Ninguna	





Comunidad de Madrid

La presente memoria se ha elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

I. JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA ABREVIADA.

La elaboración de una MAIN abreviada queda justificada, en aplicación de lo previsto en el 6 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, al no derivarse de la propuesta normativa impactos económicos, presupuestarios, sociales, sobre las cargas administrativas ni cualquier otro análogo, que resulten apreciables o significativos.

II. OPORTUNIDAD DE LA NORMA.

Los principios de buena regulación se recogen en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 2 del citado Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

El objetivo de la propuesta normativa es aumentar el plazo para la resolución de los procedimientos de inscripción de actos que establece la Ley 1/2001 relativos a Fundaciones, de tres a cuatro meses con la finalidad de adecuarlo a la realidad del Subsector Público Fundacional, al elevado número de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, al volumen anual de expedientes tramitados y a la complejidad de muchos de ellos, especialmente, los relativos a constitución de fundaciones, modificaciones estatutarias, y a órganos de Gobierno, lo que justifica, cuanto menos, un plazo de duración igual al de los procedimientos de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid; máxime, si se tiene en consideración que en la legislación estatal, el plazo máximo para notificar la resolución es de seis meses cuando se trate de la primera inscripción, modificación o nueva redacción de estatutos, fusión y extinción de la fundación y de tres meses para el resto. Por tanto, concurren razones de interés general, que aconsejan





Comunidad de Madrid

acometer la modificación legal en cuestión, conforme a los principios de necesidad y eficacia, así como a los de proporcionalidad y eficiencia, ya que el aumento del plazo de tramitación de los procedimientos de inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid en un mes posibilitará la adecuada tramitación de los expedientes, permitiendo una mejor prestación del servicio público, lo que redundará en un beneficio a los ciudadanos.

Así, en el ejercicio de la potestad legislativa, y para dar cumplimiento a los objetivos perseguidos con la tramitación del anteproyecto de ley, se actúa de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica.

Los principios de necesidad y eficacia quedan salvaguardados, ya que la modificación puntual pretendida proporciona un instrumento adecuado para la consecución del fin de interés general que se persigue: disponer de un plazo máximo de duración de los procedimientos acorde con el número de fundaciones de la Comunidad de Madrid, así como con el volumen y complejidad de los procedimientos tramitados, permitiendo, en definitiva, una mejor prestación del servicio por el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la propuesta normativa es coherente con el ordenamiento jurídico, nacional, autonómico, así como el de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre; y, conforme al principio de proporcionalidad, incluye tan solo la regulación imprescindible para atender el objetivo de la norma. Su contenido también resulta acorde con el principio de eficiencia, pues su aprobación no supone el establecimiento de cargas administrativas innecesarias o accesorias para los ciudadanos; así mismo, se supedita plenamente al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Por último, en aplicación del principio de transparencia, la Comunidad de Madrid posibilitará que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración del anteproyecto.





Comunidad de Madrid

Se ha considerado la posibilidad de establecer un plazo máximo para notificar la resolución de seis meses cuando se trate de la primera inscripción, modificación o nueva redacción de estatutos, fusión y extinción de la fundación y de tres meses para el resto, en iguales términos que la regulación estatal. Finalmente, se ha optado por un plazo máximo general de cuatro meses para todos los procedimientos en materia de fundaciones, con el fin de evitar la demora excesiva de resolución de los procedimientos, y, al propio tiempo permitir que el plazo para resolver los procedimientos de inscripción de los órganos de gobierno de las fundaciones sea superior a tres meses, dada la complejidad que, en ocasiones, pueden presentar.

Así mismo, se elegido esta opción como intermedia entre el plazo máximo general de 6 meses, previsto en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el exiguo plazo actual de tres meses.

III. TÍTULO COMPETENCIAL.

Se pretende la aprobación del presente anteproyecto de ley, al amparo de la competencia atribuida en materia de procedimiento administrativo por el artículo 26.1.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero (EACM) y régimen jurídico de su Administración Pública por el artículo 27.2 EACM, así como en el título competencial referido a la materia sustantiva cuyo procedimiento se ve afectado, fundaciones. A este respecto, el artículo 26.1.26 EACM establece que la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones dentro de su ámbito territorial.

IV. ANÁLISIS JURÍDICO EN RELACIÓN CON EL DERECHO NACIONAL, DE LA UNIÓN EUROPEA E IMPACTO EN OTRAS NORMAS AUTONÓMICAS.

El anteproyecto de ley en tramitación no afecta a ninguna disposición normativa de ámbito estatal ni comunitario europeo, sino que tiene por objeto la modificación del apartado 2.3 del Anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por





Comunidad de Madrid

la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo, en su redacción dada por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña.

Ello implicará, así mismo, la derogación, del artículo 17.1 del Decreto 20/2002, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, en lo relativo al plazo para resolver los procedimientos de inscripción en dicho Registro.

V. IMPACTO PRESUPUESTARIO.

La modificación legislativa en cuestión no supondrá un incremento del gasto público ni una disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto de los autorizados y previstos en la Ley de Presupuestos, toda vez que consiste el simple aumento en un mes del plazo para resolver y notificar los procedimientos en materia de fundaciones.

VI. CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN.

A) Contenido.

El objeto del anteproyecto de ley es operar una modificación puntual del Anexo de la Ley 1/2001, de 29 de marzo, por la que se establece la duración máxima y el régimen de silencio administrativo de determinados procedimientos (en la redacción dada por el artículo 8 de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña), concretamente, del apartado 2.3, con el fin de que el plazo máximo de resolución (y notificación) de los procedimientos en materia de fundaciones sea de cuatro meses en vez de tres, atendiendo, así, a la realidad del Subsector Público Fundacional de la Comunidad de Madrid, al volumen de expedientes tramitados y a la complejidad de muchos de ellos.

De hecho, el contenido del texto propuesto sería el siguiente:

“2.3 Inscripción de actos que establece la Ley relativos a fundaciones. Cuatro meses. Estimatorio.”





Comunidad de Madrid

Consecuentemente, la estructura de la norma vendrá constituida tan solo por un artículo único, una disposición final y una disposición derogatoria.

B) Descripción de la tramitación prevista.

La tramitación se fundamenta en la aplicación del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, ha promovido el anteproyecto al que se acompaña la presente Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que será objeto de actualización continua, de acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto 52/2021.

Se ha prescindido del trámite de consulta pública, ya que la propuesta carece de impacto significativo en la actividad económica y regula un aspecto muy parcial de la materia.

Será evacuado trámite de audiencia e información públicas, tal como establecen los artículos 60.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, y 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

Se estima que la aprobación del anteproyecto no presenta impacto por razón de género, en la infancia, en la adolescencia o en la familia, ni en la orientación sexual e identidad de género, como se pondrá de manifiesto durante la tramitación del proyecto. En este sentido, se solicitará la emisión de los informes de análisis de los impactos sociales.

En conclusión, se evacuarán los informes siguientes:

- Informe de coordinación y calidad normativa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.





Comunidad de Madrid

- Informes de impacto social: informes de impacto por razón de género (artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres); en materia de familia, infancia y adolescencia (artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas) y de impacto por razón de orientación sexual e identidad y expresión de género (artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y artículo 21 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid).
- Informes de observaciones de las Secretarías Generales Técnicas, en virtud del artículo 4.3 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.
- Informe de legalidad de la Secretaría General Técnica, en aplicación del artículo 8.5 del citado Decreto 52/2021.
- Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, conforme a lo previsto en el artículo 4.2 f) del Decreto 52/2021 y el artículo 4.1 a) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a la fecha de la firma,

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
P.S. LA VICECONSEJERA DE JUSTICIA Y VÍCTIMAS
(por Resolución de 30 de septiembre de 2021)

Fdo.: Yolanda Ibarrola de la Fuente

